

**NOMENCLATURA** : 1. [40] Sentencia  
**JUZGADO** : 9º Juzgado Civil de Santiago  
**CAUSA ROL** : C-5545-2020  
**CARATULADO** : AGUAS DEL ALTIPLANO  
**S.A./SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS**

Santiago, treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.

**VISTOS:**

En presentación de 23 de marzo de 2020 comparece el abogado Juan Luis Collao Carvajal en representación de Aguas del Altiplano, ambos domiciliados en avenida Isidora Goyenechea N°3.600, piso 4, comuna Las Condes, quien deduce reclamo en contra de la resolución exenta N°4060 de 11 de noviembre de 2019 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dictada por don Gonzalo Astorquiza por orden del Superintendente de Servicios Sanitarios (s), todos con domicilio en calle Moneda N°673 piso 9, comuna de Santiago.

Indica que el 7 de febrero de 2021 la Superintendencia de Servicios Sanitarios dictó la resolución SISS N°397/2018 que dio inició un procedimiento administrativo de sanción en contra de su representada.

Mediante la resolución que se reclama la Superintendencia aplicó una multa de 125 UTA.

Su representada presentó un recurso de invalidación, el cual fue acogido parcialmente mediante resolución N°723 de 10 de marzo de 2020, rebajando la multa a 90 UTA.

1.- Infracción sancionable de conformidad con el artículo 11 literal a) de la Ley N°18.902.

La Superintendencia sostiene que la empresa no presentó evidencia que conectara el corte de agua potable en Arica, causado por un corte de suministro eléctrico, con un hecho ajeno a su control que fuera imprevisto e irresistible. Según la Superintendencia el corte de agua se debió a la falta de previsión de acciones y medidas necesarias, como tener operativos los respaldos eléctricos en la planta de tratamiento de agua potable de Lluta, estimando que la causa principal del corte del servicio de agua potable fue no disponer de un procedimiento adecuado para la operación de esos equipos de respaldo que permitieran garantizar su continuidad durante la emergencia eléctrica.

La falta del “procedimiento adecuado” al que hace referencia la Superintendencia, habría quedado en evidencia al resultar inoperable el equipo electrógeno de la planta de osmosis inversa de Lluta.

Sin embargo, la Superintendencia no consideró elementos y documentos que daban cuenta que las fallas verificadas en el grupo electrógeno de la planta de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QZJTXQRMXE

osmosis inversa de Lluta, con escasas horas de uso y sus mantenimientos preventivos y de prueba debidamente realizados, configuran la fuerza mayor, por cuanto concurren los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad.

Adicionalmente la Superintendencia sostiene que su representada no disponía de las medidas de seguridad que habría instruido en determinados actos administrativos -no singularizados en la resolución- suponiendo que, de haber contado con una o más de ellas, habría resultado absuelta.

Resulta sesgado el análisis efectuado por la Superintendencia, toda vez que, el grupo electrógeno de la planta de osmosis inversa de Lluta es precisamente el equipamiento destinado a enfrentar fallas en el suministro eléctrico y frente a la falla no puede entenderse que ha habido negligencia de su parte, cuestión que, a la luz de la resolución, se vería agravada por no haber contado con un “stock de repuestos suficientes” para enfrentar las deficiencias, lo que la obligaría a disponer de repuestos por cada componente que pudiere verse afectado por alguna falla.

La resolución de la Superintendencia sostiene que no se configuraría la eximente de responsabilidad de fuerza mayor, ya que no se verificaron los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad, en resumen, por lo siguiente:

a) a) la imprevisibilidad, por cuanto su representada conoce el historial de las fallas eléctricas, lo que le permite anticipar la frecuencia de este tipo de fallas.

Al respecto, se expuso en el proceso de sanción que la existencia de un historial de fallas no permite prever su ocurrencia en un momento determinado, menos respecto de un evento que conllevó a la suspensión no programada del servicio eléctrico por más de 22 horas.

a) b) la irresistibilidad, por su parte, no se habría acreditado por cuanto las fallas en válvulas, bomba inyectora, de levante u otro elemento electrónico o mecánico del grupo generador ya sea por errores de operación o fortuitos, son esperables, por lo que el hecho causal era resistible.

b) Advierte la resolución que su representada no habría adoptado ninguna de las medidas de seguridad que la Superintendencia habría instruido, dando cuenta ello de una supuesta inexistencia de procedimientos frente a fallas.

c) Al respecto, su representada cuenta con a lo menos 30 grupos electrógenos y con 22 sondajes que, en su conjunto, alimentan a la planta desaladora de Lluta, por lo que, pretender sondajes de reserva adicionales a los indicados o una mayor cantidad de grupos electrógenos -o más repuestos que los razonablemente procedentes- significa una imposición irracional de parte de la autoridad.

De otro lado, en relación con la falla del grupo generador, resulta absolutamente inusual, pues afectó un componente de la bomba de petróleo



(solenoides), pieza que presenta una tasa de falla muy baja; tanto así, que los 30 grupos generadores de que dispone en la ciudad de Arica, ninguno lo ha presentado y a ese momento tenía alrededor de 200 horas de operación, es decir, estaba prácticamente nuevo.

De este modo, las referencias efectuadas por la Superintendencia a la inexistencia del elemento irresistibilidad, resultan desafortunadas, en cuanto, esta se acredita con la debida diligencia alegada. La Superintendencia señala que su actuar diligente no es cuestionado ni reprochado. Sin embargo, en un acto arbitrario, sostiene que dicho elemento no es materia del proceso de sanción, surgiendo la interrogante ¿de qué manera, sino, mediante la debida diligencia, podría acreditarse la irresistibilidad del evento imputado?

Tan arbitrario resulta el análisis efectuado por la Superintendencia que sostiene que el reproche no dice relación con la circunstancia de que un equipo falle, sino con la inexistencia de un procedimiento para evitar este tipo de emergencias, lo que resulta incomprensible cuando precisamente lo que reprocha la resolución es la falla del equipo en cuestión, aun habiéndose acreditado su mantenimiento preventivo, ser un equipo nuevo y la existencia de los repuestos necesarios para enfrentar las fallas más comunes, entre las cuales no se encuentra el solenoide ya referido. El arbitrario análisis apunta a la supuesta negligencia de su representada en relación con el deber de garantizar la continuidad y calidad del servicio de distribución, aun cuando Aguas del Altiplano acreditó la debida diligencia.

La debida diligencia y la irresistibilidad han sido acreditadas en autos conforme se indica a continuación:

a) El manual de operación del fabricante aseguraba una operación bajo determinadas condiciones, que debieron permitir el funcionamiento durante la emergencia del 14 de diciembre de 2018, es así como, el equipo fue adquirido considerando elementos tan esenciales como el funcionamiento sin contratiempos durante una emergencia eléctrica y con la autonomía suficiente que permitiese la operación durante todo el tiempo que durase una emergencia, en los mismos términos establecidos por el fabricante.

No existía motivo alguno para que un equipo aún en garantía, que solo tenía un uso acumulado en stand by de 209 horas, fallara, por lo que no es efectivo que no tenía en funcionamiento el grupo electrógeno de la planta Lluta o que no adoptó las acciones y medidas tendientes a evitar la discontinuidad, por el contrario, se encontraba en condiciones de funcionamiento, en su condición stand by, por lo que debía operar sin contratiempos durante todo el período que duró



la emergencia eléctrica; sus fallas, como se ha expuesto, se encuentran fuera de la esfera de su responsabilidad y no podían ser previstas ni resistidas.

b) Su representada ejecutó de manera previa y conforme las recomendaciones del fabricante, todos los mantenimientos preventivos, orientados específicamente a mantener la operatividad del sistema de respaldo eléctrico, en condición de stand by o reserva, cuyo funcionamiento óptimo, se activa al momento de presentarse una emergencia como la referida.

Así, cabe acoger la exención de responsabilidad alegada, toda vez que se configura la imprevisibilidad, por la existencia de una falla en el suministro, respecto de la cual su representada no tenía cómo prever su ocurrencia y, de otro lado, la irresistibilidad está acreditada en cuanto adoptó todas las medidas razonables para enfrentar eventos como el referido, disponiendo de grupos electrógenos suficientes e idóneos para enfrentar cortes de suministro eléctrico y, aun cuando adoptó las medidas y acciones tendientes a mantenerlos operativos, nada hacía presagiar que un equipo nuevo, fallara.

2.- Infracción sancionable de conformidad con el artículo 11 literal b) de la Ley N°18.902.

A este respecto, conforme lo expuesto, la multa impuesta por esta infracción debe ser dejada sin efecto, dando por reproducidos todos los fundamentos ya expuestos.

Sin perjuicio de lo anterior, la circunstancia de haber afectado a un gran número de clientes de Arica (45.870) no puede ser calificado como la “generalidad” de la población de esa ciudad, cuando la afectación alcanzó el 71,4% y no a la “casi totalidad” como refiere el concepto “generalidad” en el Diccionario de la Real Academia Española.

Del mismo modo y, para efectos de moderar la gravedad de la multa impuesta, se debe indicar que las referencias expuestas en la resolución en relación con una afectación que duró hasta 52 horas, la duración real de la discontinuidad fue de 20 horas y las referencias al máximo de 52, solo se encuentra acotado tal como indica la resolución a la población de Cerro El Chuño, quienes no son clientes de Aguas del Altiplano y el servicio de agua potable es otorgado a solicitud de las autoridades, sector en donde, por la peligrosidad, su representada se vio imposibilitada de ingresar oportunamente a realizar movimiento de válvulas.

Así, descontados dichos clientes, tesis acogida por la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la resolución N°723, desaparece con mayor claridad la



afectación a “la generalidad de la población”, razón por la que procedía, la absolución y no la rebaja.

Por lo señalado anteriormente solicita se declare dejar sin efecto la multa impuesta, o, en subsidio, que se reduzca a la menor cantidad que determina la ley, con costas.

En comparendo de 18 de octubre de 2021 la demandada contestó la demanda, mediante minuta escrita, solicitando el rechazo de la reclamación, con costas.

Por Resolución SISS N°397-19 se inició un procedimiento de sanción en contra de la empresa Aguas del Altiplano formulándole los siguientes cargos:

- Artículo 11 inciso 1° letra a) de la Ley N°18.902, al constatarse infracción del artículo 35 del DFL MOP N°382/88, al no cumplir la concesionaria con su obligación de asegurar la continuidad del servicio de distribución de agua potable en la ciudad de Arica, el cual afectó a más de 45.870 clientes, los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 2018, extendiéndose desde 11 a 52 horas de duración.

- Artículo 11 letra b) de la Ley N°18.902, por cuanto se verificó que la concesionaria afectó a la generalidad de los usuarios por el corte del servicio de distribución de agua potable, lo cual significó que más del 70% de los clientes de los sectores Norte, Cerro La Cruz, Morro y centro de la ciudad de Arica, que representa aproximadamente a 45.870 clientes se vieran afectados por la falta de servicio.

Aguas del Altiplano SA interpuso sus descargos y medios de prueba, los cuales fueron analizados técnica y jurídicamente, decidiendo sancionarla a través de la Resolución SISS N°4060 de 11 de noviembre de 2019, la que fue posteriormente modificada, solo en cuanto a la cuantía de las multas cursadas, por Resolución SISS N°723 de 10 de marzo de 2020, producto de un recurso de reposición deducido por la concesionaria, quedando, en definitiva:

- 30 UTA por la figura infraccional de la letra a) del artículo 11 de la Ley N°18.902.

- 60 UTA por la figura infraccional de la letra b) del artículo 11 de la Ley N°18.902.

Los montos de la mismas fueron determinados prudencialmente por el Superintendente, en atención a la gravedad de la infracción.

El único argumento alegado por la reclamante en su demanda es la supuesta concurrencia de fuerza mayor, remitiéndose a relatar los argumentos ya considerados por su parte para la aplicación de la sanción, pero nada expone respecto de las justificaciones para que se debiera acoger la eximente, carga



probatoria que recae en ella, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil y al artículo 35 de la Ley General de los Servicios Sanitarios, el que prescribe que las circunstancias de fuerza mayor, deben ser calificadas como tal, por resolución fundada de la Superintendencia.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar lo siguiente:

El 14 de diciembre de 2018 se produjo un corte de energía eléctrica en la ciudad de Arica, aproximadamente a las 17:00 horas. Mismo día en que se suspendió el suministro de agua potable, cuya duración se prolongó hasta el 17 de diciembre de 2018, afectando a más del 70% de la totalidad de los clientes de Arica, esto es 45.870 clientes.

Atendiendo a este corte de suministro de Agua Potable, fiscalizadores de la Superintendencia, en su calidad de ministros de fe, constataron que Aguas del Altiplano SA no tenía en funcionamiento el grupo electrógeno de la planta Lluta, que representa un tercio de la producción total de agua potable, el que había sido previamente declarado en su plan de desarrollo 2015 y que, a su vez, el segundo grupo electrógeno, de menor capacidad, tampoco pudo entregar la energía eléctrica comprometida en el mismo, siendo esta situación, la que impidió el normal desempeño de la planta de tratamiento de agua potable de Lluta, al no disponer de un procedimiento adecuado para la operación de equipos eléctricos de respaldo, que son precisamente los que permiten garantizar la continuidad del servicio de agua potable, frente a una emergencia de energía eléctrica. Tal fue la magnitud que alcanzó el corte masivo y prolongado de agua potable, que la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) debió activar el protocolo para suministro alternativo por cortes comuna de Arica, desplegando la coordinación de diversos servicios de emergencias de otras instituciones, tales como Bomberos, Ejército y Seremi de Salud, entre otras, para la distribución del abastecimiento alternativo, a fin de evitar consecuencias sanitarias y aminorar el gran malestar que este tipo de eventos generan en la población.

Al ser el agua potable, un insumo básico necesario para la vida y la salud de la población, esta Superintendencia ha instruido una serie de medidas de seguridad que las concesionarias deben cumplir y así evitar que cortes tan prolongados y extensos como el que se produjo. Entre estas medidas se encuentran: la exigencia de sondajes de respaldo, bombas Stand By de mantención o seguridad, volúmenes de almacenamiento en estanque que permitan una holgura en caso de fallas, equipos electrógenos en caso de cortes de suministro eléctrico, disponer de stock de repuestos de elementos esenciales, entre otros.



Llamadas las partes a conciliación esta no se produjo.

Por resolución de 19 de abril de 2023 se recibió la causa a prueba.

Por resolución de 3 de julio de 2024 se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el inciso 1° del artículo 13 de la Ley N°18.902 dispone que “El afectado podrá reclamar de la aplicación de la sanción o de su monto, ante el juez de letras en lo civil que corresponda, dentro del plazo de diez días contado desde la fecha de su notificación”.

**SEGUNDO:** Que, para los efectos de este reclamo, habrá de tenerse por establecida la siguiente secuencia de actos administrativos y hechos:

- La Superintendencia de Servicios Sanitarios mediante resolución SISS N°397-19 inició un procedimiento de sanción en contra de la empresa Aguas del Altiplano formulándole los siguientes cargos: no cumplir con su obligación de asegurar la continuidad del servicio de distribución de agua potable en la ciudad de Arica, el cual afectó a más de 45.870 clientes, los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 2018, extendiéndose desde 11 a 52 horas de duración; y, afectar a la generalidad de los usuarios con el corte del servicio de distribución de agua potable, lo cual significó que más del 70% de los clientes de los sectores Norte, Cerro La Cruz, Morro y centro de la ciudad de Arica, que representa aproximadamente a 45.870 clientes.

- Aguas del Altiplano SA presentó descargos mediante presentación de 13 de marzo de 2019, alegando la eximente de fuerza mayor y para acreditar su concurrencia acompañó los siguientes documentos: a) Manual del operador Grupo electrógeno Motor QST30-G3/G4 con PowerCommand® 3.3 o PowerCommand® Control 3.3 MLD, instructivo de Aplicación de Plan ABC, que indica las condiciones de funcionamiento ajustadas a la emergencia de autos; b) Carta ADA 030/15, en la que se detallan los ajustes al Cronograma Base de Arica, con explicaciones sobre los respaldos eléctricos; c) Carta ADA 010/16, mediante la cual se remite a la Superintendencia de Servicios Sanitarios el Autocontrol PD 2015, desde donde puede desprenderse el cumplimiento total del Cronograma 2015 respecto a la instalación de los respaldos electrógenos para garantizar el 70% del suministro; d) Cronograma de Obras 2015, registrado en la Superintendencia bajo el código SC-15-00; e) Cotización de Detroit Quick Services, del año 2014, con las especificaciones técnicas del equipo generador; f) Informe Técnico por Servicio de Inspección por Emergencia Black Out en el equipo POI Lluta GPEL 13011, efectuado por Enernuevas SpA, que indica que “Este tipo de fallas no es esperable de una unidad con más de 200 horas de



funcionamiento y mantenciones al día [...] El fabricante, tras analizar la unidad, concluye que se trata de una falla no prevista y poco usual en este tipo de componentes”; g) Informe interno del Grupo Electrónico; y, h) Antecedentes de la licitación pública relacionada con la adquisición e instalación del grupo electrónico.

- La Superintendencia de Servicios Sanitarios mediante resolución exenta SISS N°4060 de 11 de noviembre de 2019, sancionó a la empresa Aguas del Altiplano SA con una multa total de 125 UTA por los cargos formulados, de conformidad a lo establecido en las letras a) y b) del artículo 11 de la Ley N°18.902 en relación con el artículo 35 del DFL N°382 de 1988 del MOP.

- Aguas del Altiplano repone en contra de la resolución anterior mediante presentación de 2 de diciembre de 2019, solicitando dejar sin efecto la sanción o, en subsidio se rebaje prudencialmente la multa impuesta o se considere como agravante para futuros procesos de sanción.

- Mediante resolución exenta SISS N°723 de 10 de marzo de 2020 se rechazó el recurso de reposición, manteniendo a firme la decisión de multar, pero accediendo a la petición subsidiaria de rebaja en términos de aplicar 30 UTA por la figura infraccional de la letra a) y 60 UTA por la figura infraccional de la letra b) ambas del artículo 11 de la Ley N°18.902.

- Mediante presentación de 30 de marzo de 2020 Aguas del Altiplano informa el pago de la multa aplicada por resolución N°723 de 10 de marzo de 2020, por la suma de \$54.022.680.

**TERCERO:** Que debe dejarse establecido que las infracciones por las cuales se sancionó a la empresa concesionaria fueron las establecidas en el artículo 11 letras a) y b) de la Ley N°18.902, que señalan:

“Artículo 11.- Los prestadores de sanitarios que incurrieren en alguna infracción a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con los servicios sanitarios, o en incumplimiento de las instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte la Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios, de algunas de las siguientes multas a beneficio fiscal en los siguientes casos:

a) De una a cincuenta unidades tributarias anuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u





obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

b) De cincuenta y una a mil unidades tributarias anuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los usuarios de los servicios”.

CUARTO: Que, respecto de la primera infracción, el artículo 35 del DFL N°382 de 1988 del MOP indica que “El prestador deberá garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las que solo podrán ser afectadas por fuerza mayor”.

QUINTO: Que no se objeta por la reclamante que los hechos que se le imputan hayan ocurrido, siendo estos la afectación de la distribución de agua potable en la ciudad de Arica los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 2018 y que esto afectó a más del 70% de la población de Arica, sino que alega que el grupo de electrógeno de la planta de Lluta vio alterado su funcionamiento, siendo esto imprevisible e irresistible constituyendo, lo que la exime de responsabilidad por haberse tratado de un evento de fuerza mayor.

SEXTO: Que la resolución reclamada estableció lo siguiente:

- La causa principal del corte del servicio de agua potable fue no disponer de un procedimiento adecuado para la operación de equipos eléctricos de respaldo, que permitieran garantizar la continuidad del servicio de agua potable, frente a una emergencia de energía eléctrica, lo que quedó en evidencia al resultar inoperable el equipo electrógeno de la planta de osmosis inversa de Lluta, instalación fundamental del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Arica, por más de 22 horas, período que duró la emergencia eléctrica.

Dado que el agua potable es un insumo básico necesario para la vida y la salud de la población, es que la demandada instruyó una serie de medidas de seguridad que las concesionarias deben cumplir y así evitar que cortes tan prolongados y extensos como el que se produjo, salvo eventos de fuerza mayor catalogados por la SISS.

- La reclamante en sus descargos argumentó que las fallas en el grupo electrógeno de la planta de osmosis de Lluta fueron producto de un evento de fuerza mayor, específicamente un corte de energía eléctrica imprevisto. También alegó que se habían tomado las medidas necesarias para garantizar el respaldo eléctrico del 70%, debido a que la causa directa que significaba la operación del grupo electrógeno de Lluta fue el corte imprevisto de energía eléctrica que afectó a la ciudad de Arica el 14 de diciembre de 2018, comenzando a las 17:00 horas y extendiéndose hasta las 15:00 horas del 15 de diciembre de 2018. Las causas del



corte de electricidad se debieron al corte de un conductor superior en la línea de alta tensión que une las Subestaciones Los Cóndores y Parinacota en las torres 319 y 320.

Ella se comprometió a la instalación de un grupo generador para la planta de Lluta, con el fin de proporcionar un respaldo del 70% frente a emergencias de energía eléctrica, lo cual fue cumplido. El 14 de enero de 2015, se suscribió un contrato con Detroit Quick Services Limitada para el “Suministro de Grupos Generadores y Obras Anexas Sistema AP Lluta”. Los equipos debían garantizar un servicio continuo por al menos 48 horas de operación ininterrumpida.

Asimismo, se instaló un generador marca Cummins de 800 KW, 1000 KVA, suficiente para operar al 100% la Planta de Tratamiento de Osmosis Inversa en caso de emergencia, obra informada en el Autocontrol de Planes de Desarrollo al 31 de diciembre de 2015 mediante carta ADA-10/16 del 29 de enero de 2016. Según las pruebas de capacidad, este equipo había registrado 209,1 horas de funcionamiento al 5 de diciembre de 2018.

El equipo cuenta con un plan de mantenimiento preventivo cuatrimestral, que incluye la revisión de niveles de aceite, refrigerante, baterías, correas, cargador, entre otros. El mantenimiento anual incluye estos elementos más el cambio de filtros y aceite, incluso si el equipo no ha operado en régimen. Se acompañan órdenes de trabajo preventivo del generador durante 2018.

La falla en el funcionamiento del grupo electrógeno se debió a causas ajenas al control y diligencia de la empresa en cuanto a su mantenimiento y operación. Además, el equipo operó correctamente en la emergencia del 11 de diciembre de 2018, por lo que no había indicios de que pudiera fallar en el corte de energía del 14 de diciembre de 2018.

- En el considerando quinto de la resolución recurrida, la Superintendencia señala que todo equipo aun cuando sea nuevo puede fallar, motivo por el cual existen elementos de seguridad que permitan generar una holgura en el sistema para que este pueda cumplir con su función de entregar el agua potable en la cantidad y calidad que se requiere y en forma continua. Algunos de los sistemas de seguridad disponibles son: a lo menos 2 horas de volumen de estanque para emergencias, bombas Stand by, Sondajes de reserva, Grupos electrógenos, accesorios y repuestos, etc.

Si bien los cortes eléctricos en general son fortuitos, estos son esperables, por lo que las empresas sanitarias deben disponer de infraestructura y procedimientos adecuados para suplir dichas deficiencias e incluso estar preparadas para eventos aún mayores como son los terremotos y tsunamis, ya que



en su calidad de concesionario, tiene el deber garantizar la calidad y continuidad de los servicios que presta, siendo la propia empresa la que debe realizar sus análisis de riesgo de sus instalaciones, con el objetivo de estimar la vulnerabilidad que presenta cada uno de los sistemas de producción y actuar preventivamente en conformidad a aquello.

Además, dado que estos son equipos, en un porcentaje superior al 90% del tiempo, operan durante una emergencia, es altamente probable que cualquier falla que tengan ocurrirá en el transcurso de una de ellas, por lo cual desestimó la existencia de la eximente de responsabilidad.

En cuanto a la alegación en torno a la debida diligencia con la que habría actuado Aguas del Altiplano, la empresa entregó una serie de antecedentes relativos al grupo generador de respaldo de la planta de osmosis inversa, con lo cual, demostraría según su parecer, el cumplimiento de las exigencias en cuanto a su capacidad de respaldo y al cumplimiento del Plan de Desarrollo de 2015, acreditándose el actuar diligente en esta materia.

La falla de un equipo que cumplió con el cronograma de inversiones no es eximente en la obligación de dar continuidad de servicio de agua potable, si no fue capaz de enfrentar una situación de emergencia en forma adecuada, en un sistema de alta vulnerabilidad y dependencia como es el de Lluta.

En cuanto al descargo de una conducta diligente del prestador sanitario, cabe hacer presente que el corte de energía fue de 20:09 horas, según lo establecido en los antecedentes, sin embargo, hubo sectores de la población que luego de haber transcurrido 8:52 horas, en que la energía eléctrica había regresado a la línea de Lluta (15 de diciembre a las 15:00 hrs), continuaban sin suministro de agua potable.

El número de clientes afectados por discontinuidad de servicio fue de 45.870 clientes, es decir más del 70% de la población abastecida por la empresa sanitaria en Arica. Por consiguiente, mantener a más de 3.000 usuarios sin suministro de agua potable más de 10 horas, después de haber sido reestablecida la energía en el sector, no puede ser catalogado como un hecho irresistible, más aún si hubo sectores sin abastecimiento por 52 horas, (cuarteles 1005, 1010 y 1015) considerando que el corte de energía solo duró 20:09 horas.

SÉPTIMO: Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, la resolución reclamada se hizo cargo de todas las alegaciones formuladas por la reclamante en cuanto a no concurrir los requisitos de la eximente de fuerza mayor, dado que los cortes de energía eléctrica, si bien, son imprevistos, son resistible pues la principal función de la empresa sanitaria es dar continuidad al servicio de suministro de



agua potable, por lo cual, está obligada a garantizarlo adoptando todas las medidas necesarias para ello, incluidas las instruidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, lo que no comprobó haber hecho.

OCTAVO: Que, por otra parte, la circunstancia de que Superintendencia de Servicios Sanitarios haya estimado que fue diligente, lo fue solo respecto del hecho de contar con capacidad de respaldo y haber cumplido con el Plan de Desarrollo de 2015, lo que no la libera de la responsabilidad que se le imputa en cuanto a la falla de la capacidad de respaldo de la planta de osmosis inversa de Lluta.

NOVENO: Que, respecto de la segunda infracción, la reclamante sostiene que el corte del suministro afectó a 45.870 clientes, cifra que no representa la “generalidad” de la población de Arica, que solo alcanzó un 71,4% de los clientes.

DÉCIMO: Que la RAE define generalidad como “Mayoría, muchedumbre o casi totalidad de los individuos u objetos que componen una clase o un todo sin determinación a persona o cosa particular”.

UNDÉCIMO: Que un 71,4% de los clientes cuadra con la definición anterior, dado que corresponde a casi la totalidad de la población de Arica, pues solo no estuvo afectada solo un 28,6% de ella.

DUODÉCIMO: Que, además hay que tener presente la resolución N°723 de 10 de marzo de 2020, que redujo la multa a 90 UTA, por haberse considerado efectivo que la duración del corte no tuvo para la mayoría de los clientes la extensión tope de 52 horas, lo cual, no le hace perder la condición de haber afectado a la mayoría de población.

DÉCIMO TERCERO: Que, finalmente, la sanción impuesta está dentro de los rangos permitidos por la ley y atendida la gravedad de los hechos de que se trató por el riesgo y amenaza que constituyeron a la salud pública.

DÉCIMO CUARTO: Que por lo razonado el reclamo será desestimado y la multa será mantenida, por no existir fundamento para ser rebajada, debiendo la reclamante soportar las costas de la causa.

En consecuencia y visto además lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 de la Ley N°18.902, artículo 1698 del Código Civil y artículos 144, 170, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el reclamo interpuesto, con costas.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QZJTXQRMXE

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QZJTXQRMXE